



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-001(024)-2019-00668-01
Demandante:	Luis Hernán Zapata Avendaño
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación y consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de invalidez- capacidad laboral residual

**Medellín, noviembre veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín el 21 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor LUIS HERNAN ZAPATA AVENDAÑO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-001-2019-00668-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor LUIS HERNAN ZAPATA AVENDAÑO, llamó a juicio a COLPENSIONES, pretendiendo se declare que le asiste el derecho a la pensión de invalidez, tomando como fecha para efectos de la concesión de la prestación, la de la última cotización, esto es, 31 de mayo de 2019 y hacía atrás, por padecer una enfermedad degenerativa y crónica y por haber conservado su capacidad laboral residual, en consecuencia, se condene a Colpensiones al pago de la pensión de invalidez, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se indicó, que el señor Luis Hernán Zapata Avendaño, ha cotizado una cantidad muy superior a 50 semanas en toda su vida laboral, concretamente 297.43, que presenta una pérdida de capacidad laboral del 58.69% de origen común, estructurada el 6 de septiembre de 2009, que el actor ha sufragado cotizaciones al sistema pensional hasta el 31 de mayo de 2019, fecha a partir de la cual no pudo seguir ofreciendo su fuerza física e intelectual al mercado laboral por la enfermedad que padece, la cual es degenerativa y crónica.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que acepta como cierto la referente a las semanas cotizadas por el actor y las calificaciones de pérdida de capacidad laboral, sin constarle los motivos por los cuales siguió cotizando y que no es cierto que Colpensiones haya certificado la enfermedad del mismo como degenerativa o crónica.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas; imposibilidad de condena simultanea de pagar intereses moratorios e indexar las sumas; prescripción; compensación indexada y pago; excepción innominada; imposibilidad de condena en costas y buena fe.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 21 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que el señor Luis Hernán Zapata Avendaño es beneficiario de una pensión de invalidez, en consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocerle la prestación en cuantía de 1 SMLMV a partir del 1º de junio de 2019, calculando como valor del retroactivo pensional causado hasta el 31 de agosto de 2022, la suma de \$37.847.205, los cuales deberán indexarse al momento del pago, autorizó los descuentos con destino al sistema de salud; ordenó a Colpensiones a seguir reconociendo la pensión a partir del 1º de septiembre de 2022; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y condenó en costas a Colpensiones.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

#### **Colpensiones**

Solicita se revoque la sentencia en su totalidad, teniendo en cuenta la sentencia SU 588 de 2016, la cual exige, primero que los aportes se deriven de un ejercicio laboral y segundo que no haya sido con la intención de defraudar al sistema, en el presente caso el demandante no ha demostrado de ninguna forma que los aportes realizados de forma independiente dentro del 1º de junio 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, fueron producto de una actividad laboral u oficio ejercido por este donde obtuvo unos ingresos económicos,

considerando que el actor debió probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se ejercieron dichas actividades y si las mismas fueron acordes a su capacidad laboral y que no realizó los aportes con el único fin de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma y obtener el derecho a la pensión de invalidez y defraudar al sistema.

Solicita se tenga en cuenta que en la historia laboral del demandante se puede observar que la última cotización realizada por el empleador Víctor Alonso Serna fue hasta el 28 de febrero de 2003 y después de casi 15 años, con posterioridad a la fecha de estructuración, el mismo inició a cotizar como independiente a partir del 1 de junio de 2018 un total de 51.43 semanas y en el interrogatorio realizado por la Juez el señor Luis Hernán manifiesta que realizó las cotizaciones para obtener la pensión, es decir para cumplir los requisitos y es aquí donde se evidencia un fraude al sistema.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, no se pronunció ninguna de las partes.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Asimismo, procede la consulta, en favor de Colpensiones respecto de los puntos no apelados, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Luis Hernán Zapata Avendaño, nació el 9 de enero de 1947, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 68 del anexo 02 del expediente digital.
- Que el pretensor solicitó la pensión de invalidez el 23 de julio de 2019, prestación que le fue negada mediante Resolución SUB 213374 del 8 de agosto de 2019, conforme al documento visible a folios 23 a 29 del anexo 02 expediente digital.
- Que el demandante fue calificado por medicina Colpensiones, mediante dictamen del 27 de abril de 2016, con un porcentaje de 54.68% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, estructurada el 06 de septiembre de 2009 - ver folios 47-51, igualmente fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que le asignó un 58.69% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración 06 de septiembre de 2009 - folios 43 y 45, y finalmente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por medio de dictamen del 21 de diciembre de 2019, confirmó el dictamen de la Junta Regional, véase el folio 38 a 42 del anexo 02 del expediente digital.

-Que el actor ha cotizado un total de 297.43 semanas, tal y como se desprende de la historia laboral expedida por Colpensiones y adicionalmente prestó sus servicios en favor del Ministerio de Defensa Nacional entre el 11 de junio de 1966 y el 28 de mayo de 1968, tal y como se evidencia en los documentos visibles a folios 54 a 56 y 59 del anexo 02 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia proferida por la señora Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, verificando para tal fin, si el señor Luis Hernán Zapata Avendaño, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, en atención a la tesis de la capacidad laboral residual?

### **2.4.- TESIS**

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, si bien es cierto en aplicación del precedente de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte de Suprema de Justicia, es posible tener en cuenta la capacidad laboral residual de las personas que padecen una enfermedad congénita, crónica o degenerativa, a efectos de contabilizar las semanas exigidas en el artículo 1 de la ley 860 de 2003, desde la fecha de la última cotización, la fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral o la fecha de la solicitud de la prestación, no se encuentra acreditada en el plenario la capacidad laboral residual del accionante, por lo anterior, la sentencia deberá revocarse, para en su lugar absolver a Colpensiones de todos los pedimentos de la demanda.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

### ***El estado de invalidez***

En el presente caso, no se discute el estado de invalidez del demandante, el cual fue determinado por Colpensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, estableciéndose en el primero de los dictámenes un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 54.68% y en los dos siguientes, un porcentaje del 58.69%, por lo que puede decirse, que todos concuerdan en cuanto a que el pretensor cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En igual sentido concuerdan las experticias en la fecha de estructuración de la invalidez, 06 de septiembre de 2009, siendo el diagnóstico calificado el correspondiente a infarto agudo al miocardio.

### ***Contabilización de las semanas***

En tratándose de la pensión de invalidez, la regla general es que el derecho se rige por la norma vigente a la fecha a estructuración de la invalidez, hito temporal que debe tomarse en cuenta para la contabilización de las semanas que el legislador ha señalado como requisito para el financiamiento de la prestación. Para el caso, conforme a la fecha de estructuración de la discapacidad, 06 de septiembre de 2009, la norma a aplicar correspondería al artículo de 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que establece:

*“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

*1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez” INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-428 de 2009).*

Es claro desde la misma presentación de la demanda, que el demandante no cumple con el número mínimo de semanas en el interregno exigido por la norma, respecto a ambas fechas de estructuración, por consiguiente, se centra la Sala en el problema jurídico relativo a la procedencia de la contabilización de las semanas posteriores a la fecha de estructuración de la invalidez a efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez.

Resalta la Sala, que lo anterior, no comporta un cambio en la fecha de estructuración que fue dictaminada por las entidades calificadoras, pues tal modificación solo puede efectuarse bajo criterios técnico- científicos, precisando que se trata es de determinar si el afiliado aun presentando un estado en invalidez conservó parcialmente la fuerza de trabajo, que le permitió cotizar al sistema.

La Corte Constitución de tiempo atrás ha venido sosteniendo que la fecha de estructuración determinada en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral tratándose de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, no siempre “corresponden de manera cierta al momento en el que la persona pierde la capacidad laboral de manera permanente y definitiva, tal y como lo exige la normatividad que regula la pensión de invalidez. Así, teniendo en cuenta que la enfermedad tiene efectos paulatinos y progresivos, la persona puede seguir con su actividad laboral con relativa normalidad, hasta que por su situación de salud le resulta imposible seguir laborando y, en consecuencia, continuar cotizando al sistema de seguridad social, y es desde ese momento que

*se estructura de manera definitiva la incapacidad para continuar laborando que se deben contabilizar las 50 semanas requeridas por la legislación actual” (T561 de 2016)*

En esta dirección la alta Corporación, la sentencia SU588 de 2016, unifica las reglas que deben ser aplicadas para el reconocimiento de pensiones de invalidez de las personas que padecen una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, exponiendo, en lo pertinente:

*“Sin embargo, tratándose de personas con enfermedades degenerativas, crónicas y/o congénitas, patologías que debido a sus características, se presentan desde el nacimiento o son de larga duración y progresivas, la evaluación no resulta tan sencilla, puesto que el momento asignado como aquel en el cual se perdió definitivamente la capacidad para laborar suele coincidir con el día del nacimiento o uno cercano a este, así como con la fecha del primer síntoma de la enfermedad o la del diagnóstico de la misma. Por esta razón, estas personas normalmente no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un número importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada.*

*29.1. En estos casos, esta Corte ha precisado que se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, en tanto que, de lo contrario, se impondría a la persona una condición imposible de cumplir y se estarían desconociendo una serie de principios de orden constitucional tales como “(i) el principio de universalidad<sup>[47]</sup>; (ii) el principio de solidaridad<sup>[48]</sup>; (iii) el principio de integralidad<sup>[49]</sup>; (v) el principio de prevalencia de la realidad en materia laboral y de seguridad social (art. 53, CP), así como (v) la buena fe<sup>[50]</sup>”<sup>[51]</sup>. Además, con este proceder se estarían vulnerando los derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad, que son sujetos de especial protección constitucional, pues dicha interpretación es, a todas luces, discriminatoria e implica que las personas con enfermedades congénitas, degenerativas y/o crónicas, según las circunstancias, no accederán a un derecho pensional. “*

Para el efecto, en segmento posterior del fallo, se define la capacidad residual en los siguientes términos:

*“Respecto de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado que se trata de la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento, a la*

*Administradora de Fondos de Pensiones le corresponde comprobar que el beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente ejercida<sup>[66]</sup>. El análisis de lo anterior busca evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantiza la sostenibilidad fiscal del mismo<sup>[67]</sup>, en tanto que, si una persona ha cotizado durante varios años de manera ininterrumpida o, en su defecto, lo ha hecho de forma interrumpida, pero durante periodos de tiempo importantes, es fácil deducir que los aportes se han hecho gracias a la capacidad laboral residual con la cual ha podido ejercer un oficio que le ha permitido garantizar para sí y para su familia un mínimo vital.*

*31.3. Una vez el fondo de pensiones verifica (i) que la invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa y, (ii) que existen aportes realizados al sistema por parte del solicitante en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento desde el cual verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003, es decir que la persona cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Al respecto, esta Corte ha considerado que ni el juez constitucional, ni la Administradora de Fondos de Pensiones pueden alterar la fecha de estructuración que definieron las autoridades médicas competentes. Por lo tanto, para determinar el momento real desde el cual se debe realizar el conteo, las distintas Salas de Revisión han tenido en cuenta la fecha de calificación de la invalidez<sup>[68]</sup> o la fecha de la última cotización efectuada porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico<sup>[70]</sup> o, inclusive, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional.”*

Posición reiterada, entre muchas otras, en las sentencias de tutela T557 de 2017, T668 de 2017, T046, T 157, T460 de 2019, T059 de 2020 y T095 de 2022.

A su turno, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante las sentencias CSJ SL3992-2019 y SL3275-2019, admitió que en casos excepcionales en donde el afiliado padece enfermedades consideradas crónicas, congénitas o degenerativas que produzcan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es posible que para determinar el momento real desde el cual

se debe realizar el conteo de las semanas exigidas por la ley aplicable para consolidar el derecho a la pensión de invalidez, se acuda también a los siguientes criterios: *i)* la fecha de emisión del dictamen mediante el cual se califica el estado de invalidez; *ii)* la fecha de la última cotización efectuada al sistema; o *iii)* la fecha de solicitud del reconocimiento pensional, así se expuso, entre otras, en sentencia SL 3992-2019, en la cual se dijo:

*“En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, contrario a lo defendido por la censura, sí resulta necesario establecer excepciones puntuales a las reglas de determinación de la fecha de estructuración de la invalidez y su estipulación técnica, en función de la naturaleza de la enfermedad, de manera que es posible identificarla con la «...fecha de calificación de la invalidez, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la data de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico...», todo con fundamento en criterios claros, razonables y suficientemente informados [...]. (Subraya la Sala)”.*

Esta línea de decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterada en las sentencias SL4567 del 02 de octubre de 2019; SL5603 del 13 de noviembre de 2019; SL770 del 05 de febrero de 2020, SL1311 del 21 de abril de 2020; SL2068 del 01 de julio de 2020, SL2922 del 05 de agosto de 2020, SL 2332 del 02 de junio de 2021, SL 2878 del 26 de junio de 2021, SL 3650 del 07 de julio de 2021, SL 3363 del 03 de agosto de 2021 y SL 3817 del 24 de agosto de 2021.

## **2.6. CASO CONCRETO**

En el sublite, la falladora de primera instancia determinó con base en el dictamen emitido por Colpensiones el 27 de abril de 2016, que el padecimiento del actor “infarto agudo al miocardio” tenía un carácter crónico y degenerativo, situación que permite se establezca una fecha de estructuración del estado de invalidez diferente a la consignada en las calificaciones de

pérdida de capacidad laboral, no obstante debe precisar que, si bien Colpensiones en el dictamen N° 201614937200 del 27 de abril de 2015, indicó que la enfermedad del accionante era degenerativa y catastrófica, lo cierto es que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en dictamen N° 61281 del 07 de octubre de 2016, determinó que la patología no era degenerativa, progresiva, ni catastrófica, por lo que no se cuenta con el apoyo de elementos técnicos-científicos suficientes que permitieran determinar que en efecto el infarto agudo al miocardio, traduzca una afectación crónica o degenerativa.

Así las cosas, teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia, la enfermedad que presenta el demandante, infarto agudo al miocardio, no es congénita, crónica y/o degenerativa y, por lo tanto, en principio, no tiene aplicación la tesis de la capacidad laboral residual.

Pese a lo anterior, la definición de enfermedad crónica, de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que acoge la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incluye las enfermedades cardíacas como crónicas:

*“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), debido a sus características las enfermedades de tipo «crónico» son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual «aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, mediante el consumo constante de fármacos (...); dichas enfermedades, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades mundiales».*

*De acuerdo con la primera organización, se catalogan dentro de este grupo «las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes», en tanto constituyen padecimientos y condiciones que, a pesar de tener manifestaciones clínicas diversas, comparten algunas características básicas comunes, como son su persistencia, el requerir manejo durante años o decenios y el hecho de que desafían seriamente la capacidad de los servicios de salud. Se caracterizan también por tener «estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter*

*degenerativo» que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto afectado.*

*[1: Documento técnico del proyecto de desarrollo de autonomía para la prevención y control de las condiciones crónicas en el distrito capital plan de intervenciones colectivas. SDS. 2009.]”*

Bajo ese supuesto, admitiendo la patología que padece el gestor del proceso es crónica, corresponde a éste acreditar el trabajo efectivo como fuente de las cotizaciones al sistema, esto es, el ejercicio de su capacidad laboral residual, pues no basta únicamente el pago los aportes, para entender cumplido este requisito, pues la finalidad no es permitir que las personas dictaminadas con un estado de invalidez se afilien al sistema o activen las cotizaciones, con posterioridad a la ocurrencia de la contingencia, con lo que se afectaría el sistema, sino reconocer que el asegurado conservó alguna capacidad que le permitió vincularse al mercado de trabajo, afiliarse al sistema y realizar las cotizaciones.

En el caso objeto de estudio, de la historia laboral obrante a folios 54-56, se advierte que el señor Luis Hernán Zapata Avendaño, comenzó a efectuar cotizaciones al sistema desde 05 de mayo de 1969 cotizando de forma interrumpida como trabajador dependiente hasta el 28 de febrero de 2003 y solo hasta junio de 2018, es decir, 15 años después y cuando ya se habían dictaminado el estado de invalidez por pérdida de capacidad laboral superior al 50%, , reanuda sus cotizaciones, realizando aportes como independiente hasta el 31 de mayo de 2019, tiempo equivalente a 51.48 semanas.

Bajo el anterior escenario, a juicio de la Sala no se acreditó que el señor Zapata Avendaño, conservara una capacidad laboral residual que sustente las cotizaciones efectuadas, pues en la prueba aportada, no se evidencia ningún medio de convicción, que demuestre que esos aportes correspondan efectivamente a periodos laborados por el promotor del proceso, siendo relevante reiterar que se realizan con posterioridad a la calificación de pérdida de capacidad laboral, como trabajador independiente y en un número casi

exacto a las 50 semanas requeridas para obtener la prestación económica, aunado a la propia confesión del promotor del proceso, quien al momento de rendir interrogatorio, manifestó que trabajaba en una carreta y le daba la plata a un señor para que le pagara en el banco, que se quedaba sin comer nada, por pagar y que recogía para pagar y poder obtener la pensión, de donde se desprende que en efecto, el único propósito del accionante era poder acceder a la pensión de invalidez.

En el contexto anterior no es aplicable la tesis de la capacidad residual, razón por la cual la protección que reclama el demandante no puede hacerse con los recursos del sistema pensional, sino a través de la oferta estatal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y discapacidad.

Por lo expuesto, deberá revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar, absolver a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda.

Se abstendrá la Sala de imponer condena en costa al actor en las instancias, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad alegadas en el proceso.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral de Circuito de Medellín, el 16 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario instaurado por el señor LUIS HERNAN ZAPATA AVENDAÑO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES COLPENSIONES, y en su lugar, se absuelve a COLPENSIONES, de todas las súplicas de la demanda.

2.- Sin costas en ambas instancias.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
**Magistrada**

  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
*Se suscribe con firma estanteada por salubridad pública*  
*(Art. 11 Dec 491 de 2020)*

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
**Magistrado**